

Foessa Euskadi txostenaren laburpena

Resumen Informe Foessa Euskadi



Informe FOESSA EUSKADI

Introducción y metodología informe

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España y en la Comunidad Autónoma de Euskadi describe un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis, las recuperaciones no han cerrado la brecha. La integración social se ha erosionado con un aumento importante de la integración precaria.

El IX Informe FOESSA es el resultado del trabajo de casi 500 personas. Detrás de él hay un equipo solvente y comprometido con la realidad de quienes más sufren la exclusión: 180 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y entidades sociales, junto a más de 300 profesionales que realizaron las encuestas. En el caso de Euskadi, se ha entrevistado a una muestra representativa de hogares en todo el territorio, dedicando más de una hora en cada hogar a conocer de cerca sus condiciones de vida y sus dificultades cotidianas.

El Informe FOESSA en Euskadi habla de pobreza, pero principalmente habla de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos, es un concepto mucho más amplio y abarca muchas más realidades que la pobreza económica. Es un fenómeno complejo que supone la acumulación de distintas dificultades y limita la integración de las personas en la comunidad. Analizamos dimensiones clave como el empleo, los ingresos, la vivienda, la salud, la participación, el aislamiento y el conflicto social para entender cómo y por qué se producen las situaciones de exclusión.

A continuación, presentaré algunos de los rasgos más relevantes de la realidad de Euskadi, con especial atención a la desigualdad, la exclusión y los factores que las alimentan.

Situación exclusión, y evolución en España y en Euskadi

Menos exclusión severa, pero más precariedad

La primera idea es ambivalente: se ha reducido la exclusión social, pero se ha ensanchado el espacio de la precariedad.

Euskadi presenta, en términos comparados, mejores resultados que la media del Estado: el espacio de integración (plena + precaria) es el más amplio del conjunto de comunidades autónomas. Pero, aun así, más de una de cada diez personas sigue en exclusión social y una parte creciente de la población “integrada” vive con la sensación de estar en la cuerda floja.

Si comparamos con 2018, el porcentaje total de personas en exclusión social se ha reducido, hasta situarse en el 12%. En términos absolutos, hablamos de unas 259.000 personas en situación de exclusión social en Euskadi, de las cuales unas 84.000 viven su forma más grave.

Sin embargo, esta mejoría convive con un cambio preocupante:

- La integración plena cae del 59% en 2018 al 53,5% en 2024 y la integración precaria crece del 27% al 35% en el mismo periodo.

No solo importa cuánta exclusión hay, sino también cómo de frágil es la integración de quienes hoy sí están “dentro”.

Pobreza y desigualdad: avances reales, pero frágiles e incompletos

En segundo lugar, hablemos de pobreza y desigualdad de rentas.

Entre 2020 y 2022, Euskadi ha experimentado una reducción clara de la pobreza monetaria: la tasa de riesgo de pobreza baja del 18% al 16,5%, y la pobreza severa desciende del 6% al 5%.

Paralelamente, también se reduce la desigualdad de ingresos (*el índice de Gini pasa de 28,2 a 26,9, y la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre (S80/S20) baja (de 4,4 a 4,3)*).

Concretamente: Euskadi sigue siendo una de las sociedades con menor desigualdad del Estado y ha mejorado moderadamente en este terreno en los últimos años.

Pero aquí de nuevo aparece el “no todo es positivo”.

El informe recoge que, entre 2018 y 2024, la carencia material y social severa ha aumentado ligeramente (del 4,3% al 4,6%).

En la práctica, en 2024: el 22,5% de la población no puede afrontar un gasto imprevisto, el 18% no puede permitirse una semana de vacaciones al año, (el 16% no puede sustituir muebles estropeados), y el 12% no logra mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Esto nos indica que, aunque los indicadores de pobreza monetaria y desigualdad mejoran, una parte importante de la población sigue sintiendo la precariedad en su vida cotidiana: en la factura de la luz, en la nevera, en la vivienda y en los márgenes de su presupuesto.

El papel clave del sistema de garantía de ingresos: muy buen alcance, pero no sin grietas

Uno de los factores que explican estos avances es el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, resultado de la combinación entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ahora gestionados de forma integrada.

Algunos datos que ayudan a entender su papel:

En 2023, la combinación IMV + RGI alcanzaba al 97,8% de la población en situación de pobreza real, según la metodología de la EPDS.

En términos comparados, Euskadi es la comunidad donde el IMV tiene mayor cobertura sobre la población en pobreza real, y donde la renta autonómica (la RGI) tiene un mayor peso relativo dentro del sistema estatal de prestaciones.

Es decir, tenemos un sistema de protección relativamente robusto que consigue sacar de la pobreza a una parte muy significativa de los hogares más vulnerables.

Ahora bien, el informe también muestra algunas sombras:

No todas las personas que podrían acceder al IMV o a la RGI lo hacen, especialmente entre quienes sufren pobreza severa.

Una parte importante de los hogares en pobreza severa declara no haber recibido información suficiente sobre el IMV, pese a ser uno de los colectivos a los que va especialmente dirigido.

Y, sobre todo, sabemos que la protección económica no elimina por sí sola otras formas de exclusión: la discriminación, el aislamiento, la falta de participación o la exclusión residencial.

No fallan las personas, falla el sistema

Me gustaría que pusieran atención a la siguiente idea: no fallan las personas, falla el sistema. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia.

La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian se forman, activan redes y siguen planes de inclusión, pero chocan con barreras estructurales. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados.

Avanzando en los problemas claves, hoy la exclusión social en Euskadi funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión.

Brechas de desigualdad y exclusión.

La vivienda es el epicentro de la desigualdad y exclusión:

La vivienda en País Vasco se ha convertido en el epicentro de la desigualdad: 1 de cada 6 personas en Euskadi (el 17%) está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

Los precios —de compra y de alquiler— crecen casi a la par que los ingresos y anulan buena parte de su incremento. Desde 2018 el Índice de Precios de la Vivienda sube del 20% (obra nueva +34%, segunda mano +17%), una cifra muy cercana al incremento de los salarios.

En el mercado del alquiler, la presión es doble.

Primero, porque entre 2018 y 2023 la cuota media ha subido un 16%, y más de un 20% en Vitoria-Gasteiz y Araba.

Y segundo, porque el alquiler se concentra en quienes peor lo pasan: solo el 17% de la población vive de alquiler, pero entre las personas en riesgo de pobreza más de la mitad, el 52%, están alquilando. En España la diferencia es menor, (21% y 36%).

Además, mientras el riesgo de pobreza apenas afecta al 5% de quienes viven en propiedad, llega al 30% de quienes viven de alquiler, frente a una media general en Euskadi del 9% en 2024.

Este incremento del coste de la vivienda se refleja en que el 13% de hogares (122.000 hogares) destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa.

Las consecuencias de esta presión que ha empeorado la vida de las familias ya son estructurales: 42 mil personas residen en una vivienda insegura por inestabilidad en la tenencia de la vivienda o por dificultades legales; y 218 mil personas en una vivienda inadecuada con problemas de hacinamiento (que ha aumentado del 7% en 2018 al 10% en 2024), habitabilidad e insalubridad. Golpeando con más fuerza a los hogares de origen extranjero, a los hogares encabezados por mujeres, las parejas con hijos y en particular las familias numerosas.

Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Euskadi. Es ahora, más que nunca, un “derecho fake”. La vivienda debería convertirse en un pilar del Bienestar: para ello es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en integración social.

El empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración no lo nota

Tenemos una buena noticia y, a la vez, un matiz importante.

Euskadi está creando empleo y una parte del mercado laboral se ha estabilizado. Entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas ha

pasado de 924 a 988 mil, un crecimiento del 7%, aunque por debajo del 12% registrado en el conjunto de España.

La mayor parte de este aumento, un 80%, se debe a la incorporación de personas nacidas en el extranjero al mercado de trabajo vasco; solo un 20% —unas 11.000 personas— corresponde a personas nacidas en España. Al mismo tiempo, la temporalidad ha bajado y esto ha tenido un efecto integrador para una parte de la población.

Pero cuando miramos la letra pequeña, la foto cambia. Sí, los salarios han subido en la nómina, pero apenas han ganado poder de compra: entre 2018 y 2023, el sueldo medio aumentó un 17% en términos nominales, pero solo un 0,6% en términos reales. Con la inflación y el coste de la vivienda disparados, esa mejora se queda muy corta.

En resumen: se trabaja más, pero para una parte importante de la población eso no basta para salir de la cuerda floja.

Por su parte, la precariedad, aunque se reduce, no desaparece: parcialidad involuntaria (8%), inestabilidad laboral grave (6%) siguen marcando a una parte importante de quienes trabajan, especialmente en sectores ligados al sector servicios. Entre los hogares que ya estaban en peor posición, el avance se nota, pero no lo suficiente.

Aquí reside la gran paradoja vasca: una notable recuperación del empleo que no se traduce en una reducción suficiente de la exclusión social, y en un aumento notable de las situaciones de integración precaria con respecto a 2018. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. El 11% de los hogares vascos están afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).

Las políticas de inclusión deben concentrarse en dos frentes: las personas desempleadas y quienes ocupan puestos de baja calidad. Son los grupos donde el desempleo y la mala calidad del empleo actúan con mayor intensidad generando carencias y exclusión, por lo que el esfuerzo público debe priorizarlos.

Los multiplicadores de la desigualdad:

Las relaciones sociales avanzan hacia una red rota y desigual

Pero si hay otro factor que el informe destaca como una importante herida, es una estructura de relaciones desigual y erosionada que, en no pocos casos, fractura el sostén cotidiano y aísla a los más expuestos. Los problemas ligados al conflicto y el aislamiento social se han reducido en Euskadi desde 2018, aunque los de aislamiento se mantienen ahora por encima de los valores registrados en 2018.

El mapa interno es desigual. La convivencia y la soledad estructural castigan de forma muy diferente a quienes están dentro o fuera del sistema. Mientras que, entre los hogares integrados, el conflicto social es muy bajo (afecta al 1,5%) y el aislamiento es limitado (5%), la situación se dispara para los hogares en exclusión. Entre ellos, el conflicto se multiplica hasta el 13% y el aislamiento crece hasta el 15%.

Tras la pandemia, las relaciones cercanas se estabilizan: un 72% de los hogares vascos dice que sus relaciones (amistades, familia, vecindario) siguen igual, un 14% considera que se han fortalecido y otro 14% que se han deteriorado. Sin embargo, de nuevo el deterioro se concentra en la población en exclusión: el 23,5% de los hogares en exclusión sienten que sus lazos se han debilitado. Quienes más carecen, son también los que más lo necesitan...

Y en medio de esta fractura, hay una mala noticia: la solidaridad entre hogares se ha debilitado fuertemente. La proporción de hogares que proporcionan algún tipo de ayuda (mutua o unilateral) ha pasado del 80% en 2018 al 56% en 2024.

A esta realidad hay que sumar la sombra de la discriminación. Casi uno de cada cuatro hogares vascos (22%) dice haberla sufrido. Entre los que viven en exclusión, la cifra se dispara a uno de cada tres (34%). El motivo más repetido entre los hogares excluidos es la nacionalidad o el origen (22,5%). La consecuencia es devastadora: el 61% de las personas excluidas que sufren discriminación reportan pérdida de oportunidades, sobre todo en el empleo y en sus relaciones sociales.

Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible. Donde se rompen, la exclusión se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo

relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias. Las respuestas, por tanto, deben actuar sobre ambos planos, material y relacional, lo que nos llevaría a la necesidad de unos servicios sociales orientados a promover conexión y habilidades relacionales, más allá de gestionar prestaciones.

La exclusión social y la precariedad están deteriorando la salud mental y exigen una respuesta estructural e integral.

En Euskadi, el 9% de la población sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15% en España, y la situación ha mejorado desde 2018. Pero los casos más graves —pasar hambre o no poder comprar medicación se concentran en la población en exclusión social y en quienes viven en integración precaria.

El motor principal es económico. La dificultad para comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos afecta a 157 mil personas, (un 7% de la población), y a casi la mitad de los hogares donde viven personas en exclusión. Y la barrera va más allá: el 13% de los hogares declara pasar o haber pasado hambre en los últimos diez años, un problema que se ha agravado desde 2018, también entre quienes están en integración precaria.

Pero quizá el rasgo más llamativo en Euskadi es el impacto sobre la salud mental. La exclusión y la precariedad están deteriorando el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Vivimos en un contexto de cambios profundos, incertidumbre, pérdida de referentes, vínculos comunitarios debilitados y vidas cada vez más precarias. En este escenario crecen la ansiedad y la depresión, especialmente entre jóvenes, personas migrantes, mujeres y quienes ya viven en pobreza. La inseguridad laboral se confirma como uno de los factores que más desgasta la salud mental.

Es verdad que la mayoría de la población valora bien su salud física y mental, y que en 2024 mejora algo el estado de ánimo respecto al golpe de la pandemia. Pero en los contextos de exclusión la imagen es muy distinta: el desgaste es mayor y el malestar sigue siendo intenso. Exclusión social y problemas de salud mental forman un círculo vicioso. Por eso no hablamos solo de un problema clínico o individual: necesitamos políticas públicas

integrales que garanticen atención sanitaria accesible, empleo digno, protección social, vivienda, redes comunitarias fuertes y lucha contra la discriminación.

Hoy, la salud mental es un auténtico termómetro de justicia social y nos señala la urgencia de una respuesta en Euskadi.

Quiénes concentran el riesgo: Los rostros de la exclusión social en Euskadi

La exclusión social en Euskadi no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles que se repiten en el territorio y que combinan recursos materiales, procedencia, edad y estructura del hogar. Lejos de ser una suma de carencias individuales, la exclusión es el resultado de posiciones sociales que concentran desventajas y exponen a ciertos grupos a mayores barreras para participar plenamente de la vida económica, política y cotidiana.

Esto nos obliga a leer los datos con una doble clave: Sí, hay avances agregados, pero determinados perfiles siguen soportando el peso principal de la exclusión, y algunos de ellos lo soportan más que antes.

El primer rostro está influido por el origen y la nacionalidad. Las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera (41%) son 5 veces superiores a las de quienes tienen nacionalidad española (8%);

La participación política actúa como un vector adicional de exclusión. Los obstáculos a la participación política derivados de la nacionalidad extranjera son la segunda problemática de exclusión más frecuente en Euskadi, afectando al 13% de la población. La exclusión no es, por tanto, solo material: también es cívica.

La infancia y la juventud configuran el segundo rostro y concentran una vulnerabilidad singular: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (20%) es más de tres veces superior a la de las personas mayores de 65 años (5,5%).

Aquí la exclusión se asocia menos a la vejez y más al ciclo de crianza, con picos en la población menor de 18 años y en el tramo de 18 a 44 años (19%).

Esta pauta sugiere que las necesidades de cuidado y el sobre coste en etapas de crianza tensan los presupuestos y elevan los riesgos, un diagnóstico respaldado por la sobrerrepresentación de hogares con menores de edad

dentro de la exclusión: estos hogares suponen el 65% de toda la población excluida en Euskadi.

La vulnerabilidad también afecta especialmente a la población juvenil en Euskadi. Una realidad que se explica por un mercado de trabajo que sigue penalizando el acceso al empleo: la tasa de paro entre los jóvenes menores de 30 años es del 17%, más del doble que la tasa general de la comunidad (8%). La fuerte presencia de inestabilidad laboral entre los jóvenes, lo que reduce la capacidad de ahorro y emancipación; y una vivienda encarecida y precaria que actúa como cuello de botella: El resultado es una transición a la adultez más larga y frágil, con proyectos de formación, movilidad y crianza postergados, en la que los hogares encabezados por jóvenes concentran con mayor frecuencia problemas residenciales y un riesgo social más alto.

El tercer rostro está relacionado con el género y la composición del hogar. Se observa con nitidez al mirar quién encabeza el hogar. La exclusión afecta al 15% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 10% cuando los encabeza un hombre. La brecha es muy acusada —mayor incluso que en el conjunto de España, y se amplifica si añadimos la carga de cuidados, la posición laboral y el acceso a la vivienda.

Un territorio que resiste bien, pero no puede conformarse

Los datos nos dicen que Euskadi es hoy un territorio relativamente protector. En comparación con el conjunto del Estado, contamos con mayores niveles de integración social, una reducción clara de la exclusión severa, menos pobreza y desigualdad y un sistema de garantía de ingresos que llega a la mayor parte de la pobreza real y evita escenarios mucho peores. Eso significa que las políticas de las últimas décadas han funcionado en buena medida y han creado un cierto escudo social.

Pero este balance positivo no puede llevarnos a la autocomplacencia. Porque, al mismo tiempo que resistimos mejor que otros territorios, vemos tres tendencias preocupantes: se ensancha la integración precaria —cada vez más gente vive “dentro”, pero con mucha fragilidad—, crece la exclusión en el acceso a derechos sociales y de ciudadanía, especialmente en vivienda y salud, y persisten bolsas importantes de vulnerabilidad

material que dejan a muchos hogares sin margen para afrontar nuevos golpes.

El mensaje no es catastrofista ni triunfalista: el sistema de protección social importa, pero no basta si no reducimos la precariedad vital, la exclusión de la vivienda y las desigualdades cotidianas.

Un modelo social agotado y una sociedad del miedo

Si miramos más allá de los indicadores, el informe describe un modelo social debilitado, que tiende a producir desigualdad, precariedad y fractura. Es una estructura económica que desgasta a las personas y al planeta, que proclama derechos universales, pero limita su acceso real, especialmente en vivienda y salud. Es un modelo ecológicamente insostenible y profundamente individualista, que convierte desigualdades estructurales en aparentes fracasos personales y rompe vínculos comunitarios.

El resultado es una sociedad del miedo y la desconfianza: la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individual, la desafección democrática y la sensación de que “cada cual se las apaña como puede”. Sin embargo, también vemos semillas de esperanza: redes comunitarias, movimientos sociales, economía solidaria y prácticas cotidianas de cuidado mutuo que muestran que existe voluntad de cambio.

Hacia un nuevo pacto social que ponga la vida en el centro

Ante esta encrucijada, el informe plantea un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento a cualquier precio y en el rendimiento individual, a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. El bienestar no puede medirse solo por el consumo, sino por la capacidad de “biencuidar”: garantizar vidas dignas y sostenibles para todas las personas.

Eso exige un nuevo pacto social con dos motores: instituciones públicas fuertes, capaces de garantizar derechos y reducir desigualdades, y una sociedad civil activa, organizada y corresponsable. Un pacto que se concrete en políticas valientes en vivienda, empleo, fiscalidad, protección social y migraciones, y que no solo redistribuya, sino que frene la desigualdad en su origen.

En definitiva, se trata de elegir entre seguir por la senda del individualismo y la insostenibilidad, o apostar por un cambio de rumbo que ponga la vida en el centro, combata la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural. De eso trata este informe: de poner datos a las fracturas, pero también a las capacidades de Euskadi, para decidir juntos un futuro en el que nadie quede atrás.

Muchas gracias.

FOESSA EUSKADI txostena

Sarrera eta Txostenerako metodologia

Gizarte-bazterketari eta -garapenari buruzko FOESSA txostenak gizartearen zatiketa-prozesu bat deskribatzen du: erdi-mailako klasea atzera egiten ari da, eta familia asko maila baxuagoetarantz doaz.

Bi hamarkadako krisiaren ostean, errekupeazio garaiak ez dute arrakala itxi. Gizarteratzea ahuldu egin da eta integrazio prekario zabaldu.

Jarraian, Euskadiko errealitatearen ezaugarri esanguratsuenetako batzuk aurkeztuko ditugu, arreta berezia eskainiz desberdinkeriar eta bazterketari eta horiek elikatzen dituzten faktoreei.

Funtsezkoak diren 3 lehen ideia, txostenaren arabera.

Lehen ideia anbigualentea da: Euskadin bazterketa soziala murriztu egin da, baina prekaritatearen eremua zabaldu egin da.

Integrazioa (osoa eta prekarioa) autonomia-erkidego guztien artean zabalena da. Baina, hala ere, hamar pertsonatik batek baino gehiagok gizarte-bazterketa egoeran jarraitzen du, eta "integratuta" bizi diren biztanleriaren artean gero eta gehiago dira mugan eta zintzilika bizi direla sentitzen dutenak.

Euskadin 259.000 pertsona inguru daude bazterketa-egoeran, eta horietatik 84.000 inguru oso egoera larrian.

Guztiz integratuta bizi direnak % 59tik (2018an) % 53,5era jaitsi dira 2024an eta integrazio prekarioan daudenak % 27tik % 35era igo dira urte hauetan.

2. ideia: 2020tik 2022ra, Euskadin pobrezia murriztu egin zela, pobrezia-arriskuaren tasa % 18tik % 16,5era jaitsi zen, eta pobrezia larria % 6tik % 5era.

Eta diru-sarreraren arteko desberdintasuna ere murriztu egin zen.

Baina "dena ez da positiboa".

FOESSA Txostenak jasotzen duenez, 2018tik 2024ra, gabezia material eta sozial larria pixka bat igo zen (% 4,3tik % 4,6ra).

Herritarren % 22,5ek ezin zion aurreikusi gabeko gastu bati aurre egin eta % 12k ez zuen lortzen etxebizitza tenperatura egokian mantentzea.

Horrek adierazten digu, diru pobreziaren eta desberdinkeria adierazleek hobera egiten badute ere, biztanleriaren zati handi batek prekaritatea sentitzen jarraitzen duela bere eguneroko bizitzan: argiaren fakturan, hozkailuan, etxebizitzan eta bere aurrekontuaren marjinetan.

Egoera honen aurrean, Diru-sarrerak bermatzeko sistemak funtsezko eginkizuna dauka.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren (BGDS) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) arteko konbinazioaren emaitza, pobrezia errearen estaldura handia da. Hau da, babes-sistema sendoa dugu eta horrek eragin positiboa du pobreziari aurre egitean.

Dena dela, itzal batzuk ere ageri dira txostenean:

Pobrezia larrian bizi diren familien zati handi batek adierazi du ez duela behar adina informazio jaso Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrerari nahiz eta bereziki zuzenduta dagoen kolektiboetako bat izan.

3. Ideia honi arreta jartzea nahi genuke: pertsonak ez dute huts egiten, sistemak egiten du huts

Bazterkeria jasaten duten familia gehienek lan egiten dute edo lan bila dabilta, ikasi egiten dute, sareak aktibatzen dituzte eta inklusio-planak jarraitzen dituzte, baina gizarte egiturak sortutako oztopoekin topo egiten dute.

Bazterketa larrian dauden lau familietatik hiruk inklusio-estrategiak aktibatzen dituzte, baina baliabide urriak dituzten eta oso gutxi pertsonalizatuta dauden operatibo zatikatuekin topo egiten dute.

Desberdinkeria- eta bazterketa-arrakalak.

Gaur egun Euskadiko gizarte-bazterketan etxebizitzak eta enpleguak dute eragina batez ere.

Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoan desberdinkeriaren epizentro bihurtu da: 6 pertsonatik 1ek (% 17) Euskadin etxebizitzari lotutako bazterkeria egoerak sufritzen ditu.

2018. urtea geroztik Etxebizitzaren Prezioen Indizea % 20 baino gehiago igo da (obra berria + % 34, bigarren eskua + % 17).

Eta 2018. urtetik 2023. urtera batez besteko alokairuen kuota % 16 igo da eta % 20 baino gehiago Gasteizen eta Araban.

Etxebizitzaren jabetza dutenen artean %5a dago pobrezia arrisku egoeran, alderantziz, alokairuan bizi diren artean pobrezia % 30erra igotzen da.

Egoera honen ondorio hauxe da: 122.000 familia Euskadin pobrezia larrian gelditzen dira etxebizitza eta hornidurak ordaindu ondoren.

42 mila pertsona etxebizitza ezegonkor batean bizi dira eta 218 mila pertsona etxebizitza desagoki batean bizi dira. Atzerritar jatorriko familiak, emakumeak buru dituzten familiak, seme-alabak dituzten bikoteak eta, bereziki, familia ugariak dira egoera hauetan dauden profilik nagusienak.

Agerikoa da etxebizitza dela gizarteratzeko ostoporik larriena Euskadin. Orain, inoiz baino gehiago, "fake eskubide" bat da.

Etxebizitzak Ongizatearen zutabe bihurtu beharko luke, etxebizitza-eskubideari lehentasuna emanaz bere merkatu balioaren gainetik.

Enpleguaren ikuspuntutik: Euskadin enplegua sortzen ari da, eta lan-merkatuaren zati bat egonkortu egin da. Aldi berean, behin-behinekotasuna jaitsi egin da, eta horrek eragin integratzailea izan du biztanleriaren zati batentzat.

Baina 2018. eta 2023. urteen artean, batez besteko soldata % 17 igo zen termino nominaletan, eta soilik % 0,6 termino errealetan. Inflazioa eta etxebizitzaren kostua izugarri igo direnez, hobekuntza hori oso motz geratu da.

Laburbilduz: lan gehiago egiten da, baina biztanleriaren zati handi batentzat hori ez da nahikoa aurrera ateratzeko bizi.

Bestalde, prekarietatea, murriztu arren, ez da desagertu: nahi gabeko partzialtasunak (% 8) eta lan-ezegonkortasun larriak (% 6) markatzen dute oraindik ere lan merkatu zati bat, batez ere zerbitzuen sektoreari lotutako lanetan.

Beraz Euskadin paradoja bat daukagu: enpleguaren errekupeazioak ez dakar gizarte-bazterkeria behar beste murriztea, eta era berean integrazio prekarioko egoerak gorantza egin dute.

Batez be etxebizitzaren prezioak eta lan-prekarietatearen erruz, lan egiteak jada ez du gizarteratzea bermatzen.

Desberdinkeria biderkatzaileak

Gizarte harremanei dagokionez, gatazkarekin lotutako arazoak murriztu egin dira Euskadin 2018. urteaz geroztik, baina isolamendua urte horretan izandako balioen gainetik daude orain.

Bizikidetzaren eta bakardade estrukturalak oso modu ezberdinean zigortzen ditu sistemaren barruan edo kanpoan daudenak. Integratutako familien artean, gatazka soziala oso baxua da (% 1,5i eragiten dio) eta isolamendua mugatua da (% 5), baina egoerak gora egiten du bazterketa jasaten duten familientzat.

(Horien artean, gatazka % 13raino biderkatzen da eta isolamendua % 15eraino hazten da).

Pandemiaren ondoren, gertuko harremanak egonkortu egin dira orokorrean, baina bazterketa-egoeran dauden familien % 23,5ek beren arteko loturak ahuldu egin direla sentitzen du. Gehien falta dutenak dira gehien behar dutenak ere.

Eta haustura horren erdian, albiste txar bat dago: familien arteko elkartasuna asko ahuldu da. Laguntza motaren bat (elkarrekikoa edo aldebakarrekoa) ematen duten familien proportzioa 2018an % 80koa izatetik 2024an % 56koa izatera pasa da.

Errealitate horri diskriminazioaren itzala gehitu behar zaio. Lau euskal familiatik ia batek (% 22) esan du diskriminazioa sufritu duela. Bazterketa-egoeran bizi direnen artean, kopurua izugarri igotzen da: hirutik batera

(% 34). Baztertutako familien artean gehien errepikatzen den arrazoia nazionalitatea edo jatorria da (% 22,5).

Loturak egiten direnean, bazterkeriari buelta eman ahal zaio. Baina loturak galdu edo ez daudenean bazterkeria areagotu egiten da.

Lotura horiek ber-eraikitzeko, **harremanak estrategikotzat hartu behar dira**: politikak kapital soziala (familia, auzoteria, elkarteak) neurtu eta indartu behar dute ekintza prebentiboekin eta komunitarioekin.

Osasun arloa aztertzen dugunean, Euskadin, biztanleen % 9k osasunean bazterketa-arazoak dituela nabaritzen dugu, eta egoerak hobera egin du 2018. urteaz geroztik.

Baina kasurik larrienak —gosea pasatzea edo medikazioa erosi ezin izatea— gizarte-bazterketa egoeran dauden herritarretan eta integrazio prekarioko egoeran bizi diren pertsonetan kontzentratzen dira.

Baliabide faltagatik botikak erosteko edo tratamenduak jarraitzeko zailtasunak 157 mila pertsonari eragiten die (biztanleriaren % 7), eta bazterketa-egoeran dauden pertsonak bizi diren etxeen ia erdiei.

Etxeen % 13ak aitortzen du gosea pasatzen duela edo pasa duela azken hamar urteetan, eta arazo hori larriagotu egin da 2018. urteaz aurrera.

Baina, beharbada, ezaugarriak deigarriena Euskadin osasun mentalaren gaineko eragina da. Bazterkeria eta prekaritatearen eraginez, egonkortasun emozionala eta gogo-aldartea okertzen ari dira.

Gizarte-bazterketak eta osasun mentaleko arazoek sorgin-gurpil bat osatzen dute. Gaur egun, osasun mentala justizia sozialaren termometroa da, eta Euskadin erantzun bat ematea premiazkoa dela adierazten digu.

AURPEGIAK

Arrisku gehien dutenak: gizarte-bazterketaren aurpegiak Euskadin

Gizarte-bazterketa ez da berdintasunez banatzen denongan: profil jakin batzuek jarraitzen dute bazterkeriaren pisu nagusia jasaten, eta horietako batzuek lehen baino gehiago jasaten dute.

- Lehen aurpegian eragina dute jatorriak eta naziotasunak. Atzerritar nazionalitatea dutenen bazterkeria-tasak (% 41) espainiar nazionalitatea dutenenak baino bost aldiz handiagoak dira (% 8);

Atzerritarrek politikan parte hartzeko dituzten oztopoak dira bazterketa-arazo ohikoenen artean bigarrena Euskadin, eta biztanleriaren % 13ri eragiten diote. Bazterketa ez da, beraz, materiala bakarrik: zibikoa ere bada.

- Haurrek eta gazteek osatzen dute bigarren aurpegia, 18 urtetik beherakoen bazterkeria-tasa (% 20) 65 urtetik gorakoena baino hiru aldiz handiagoa da (% 5,5).

Hazkuntza garaiaren zainketa-beharrek eta gainkostuak familien aurrekontuak tenkatzen dituzte. Bazterketa-egoeran dauden adingabeak dituzten familiak baztertuen % 65a dira.

Kalteberatasunak Euskadin gazteei ere eragiten die bereziki. Eta hori horrela da oraindik ere enplegua lortzea zigortzen duen lan-merkatu bat dagoelako: 30 urtetik beherako gazteen langabezia-tasa % 17koa da, erkidegoko tasa orokorraren bikoitza baino gehiago (% 8).

lan-ezegonkortasun eta etxebizitza garestiak eta prekarioak oztopo larriak dira emantzipaziorako.

- Hirugarren aurpegia generoarekin lotuta dago. Emakume bat buru duten familietan bazterkeria % 15i eragiten dio, eta gizon bat buru duten familietan, berriz, % 10i. Arrakala oso nabarmena da –Espainia osoan baino handiagoa ere bai–, eta handitu egiten da zainketa-karga, lan-estatusa eta etxebizitza eskuratzea gehituz gero.

Ondorioak

Datu guzti hauen arabera, alde batetik esan genezake, Euskadi nahiko lurralde babeslea dala gaur egun.

Baina balantze positibo horrek ezin gaitu autokonplazentziara eraman. Izan ere, beste lurralde batzuk baino hobeto eusten diogun arren, hiru joera kezagarri ikusten ditugu: **zabaldtu egiten da integrazio prekarioa** –gero eta jende gehiago bizi da “barruan”, baina ahultasun handiz–, **areagotu egiten da bazterketa gizarte- eta herritartasun-eskubideak eskuratzean, bereziki etxebizitzan eta osasunean, eta zaurgarritasun materialeko poltsa**

handiek diraute, etxe asko kolpe berriei aurre egiteko aukerarik gabe uzten dituztenak.

Beraz, babes sozialeko sistemak garrantzitsuak dira, baina beste neurri batzuk ere behar ditugu bultzatzea, bizi-prekarietatea, etxebizitzaren bazterketa eta eguneroko ezberdinkeriak murrizteko.

Eredu soziala

Datuetatik harago begiratu, ahuldutako gizarte-eredu bat deskribatzen du txostenak, ezberdinkeria, prekarietatea eta haustura eragiteko joera duena.

Emaitza beldurraren eta mesfidantzaren gizarte bat izan leiteke: bizi-prekarietateak, krisi ekologikoak eta desinformazioak indibidualismoa, desafekzio demokratikoa eta “bakoitzak ahal duen moduan moldatzearen” sentsazioa elikatzen dutenak. Hala ere, itxaropen-haziak ere ikusten ditugu: aldaketarako borondatea dagoela erakusten duten sare komunitarioak, mugimendu sozialak, ekonomia solidarioa eta elkar zaintzeko eguneroko praktikak.

Bidegurutze honen aurrean, paradigma aldaketa bat planteatzen du txostenak: zaintzan, interdependentzian eta justizia sozialean eta ekologikoan oinarritutako eredu sozial berri bat.

Azken finean, Bizitza erdigunean jarri, ezberdinkeriei aurre egiteko eta hiritargo inklusiboa eta kultur-artekoa sustatzeko. Horixe da txosten honen helburua: datuak jartzea hausturei, baina baita Euskadiren gaitasunei ere, inor atzean utziko ez duen etorkizuna elkarrekin erabakitzeko.

Informe FOESSA EUSKADI

Introducción y metodología informe

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España y en la Comunidad Autónoma de Euskadi describe un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis, las recuperaciones no han cerrado la brecha. La integración social se ha erosionado con un aumento importante de la integración precaria.

El IX Informe FOESSA es el resultado del trabajo de casi 500 personas. Detrás de él hay un equipo solvente y comprometido con la realidad de quienes más sufren la exclusión: 180 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y entidades sociales, junto a más de 300 profesionales que realizaron las encuestas. En el caso de Euskadi, se ha entrevistado a una muestra representativa de hogares en todo el territorio, dedicando más de una hora en cada hogar a conocer de cerca sus condiciones de vida y sus dificultades cotidianas.

El Informe FOESSA en Euskadi habla de pobreza, pero principalmente habla de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos, es un concepto mucho más amplio y abarca muchas más realidades que la pobreza económica. Es un fenómeno complejo que supone la acumulación de distintas dificultades y limita la integración de las personas en la comunidad. Analizamos dimensiones clave como el empleo, los ingresos, la vivienda, la salud, la participación, el aislamiento y el conflicto social para entender cómo y por qué se producen las situaciones de exclusión.

A continuación, presentaré algunos de los rasgos más relevantes de la realidad de Euskadi, con especial atención a la desigualdad, la exclusión y los factores que las alimentan.

Situación exclusión, y evolución en España y en Euskadi

Menos exclusión severa, pero más precariedad

La primera idea es ambivalente: se ha reducido la exclusión social, pero se ha ensanchado el espacio de la precariedad.

Euskadi presenta, en términos comparados, mejores resultados que la media del Estado: el espacio de integración (plena + precaria) es el más amplio del conjunto de comunidades autónomas. Pero, aun así, más de una de cada diez personas sigue en exclusión social y una parte creciente de la población “integrada” vive con la sensación de estar en la cuerda floja.

Si comparamos con 2018, el porcentaje total de personas en exclusión social se ha reducido, hasta situarse en el 12%. En términos absolutos, hablamos de unas 259.000 personas en situación de exclusión social en Euskadi, de las cuales unas 84.000 viven su forma más grave.

Sin embargo, esta mejoría convive con un cambio preocupante:

- La integración plena cae del 59% en 2018 al 53,5% en 2024 y la integración precaria crece del 27% al 35% en el mismo periodo.

No solo importa cuánta exclusión hay, sino también cómo de frágil es la integración de quienes hoy sí están “dentro”.

Pobreza y desigualdad: avances reales, pero frágiles e incompletos

En segundo lugar, hablemos de pobreza y desigualdad de rentas.

Entre 2020 y 2022, Euskadi ha experimentado una reducción clara de la pobreza monetaria: la tasa de riesgo de pobreza baja del 18% al 16,5%, y la pobreza severa desciende del 6% al 5%.

Paralelamente, también se reduce la desigualdad de ingresos (*el índice de Gini pasa de 28,2 a 26,9, y la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre (S80/S20) baja (de 4,4 a 4,3)*).

Concretamente: Euskadi sigue siendo una de las sociedades con menor desigualdad del Estado y ha mejorado moderadamente en este terreno en los últimos años.

Pero aquí de nuevo aparece el “no todo es positivo”.

El informe recoge que, entre 2018 y 2024, la carencia material y social severa ha aumentado ligeramente (del 4,3% al 4,6%).

En la práctica, en 2024: el 22,5% de la población no puede afrontar un gasto imprevisto, el 18% no puede permitirse una semana de vacaciones al año, (el 16% no puede sustituir muebles estropeados), y el 12% no logra mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Esto nos indica que, aunque los indicadores de pobreza monetaria y desigualdad mejoran, una parte importante de la población sigue sintiendo la precariedad en su vida cotidiana: en la factura de la luz, en la nevera, en la vivienda y en los márgenes de su presupuesto.

El papel clave del sistema de garantía de ingresos: muy buen alcance, pero no sin grietas

Uno de los factores que explican estos avances es el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, resultado de la combinación entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ahora gestionados de forma integrada.

Algunos datos que ayudan a entender su papel:

En 2023, la combinación IMV + RGI alcanzaba al 97,8% de la población en situación de pobreza real, según la metodología de la EPDS.

En términos comparados, Euskadi es la comunidad donde el IMV tiene mayor cobertura sobre la población en pobreza real, y donde la renta autonómica (la RGI) tiene un mayor peso relativo dentro del sistema estatal de prestaciones.

Es decir, tenemos un sistema de protección relativamente robusto que consigue sacar de la pobreza a una parte muy significativa de los hogares más vulnerables.

Ahora bien, el informe también muestra algunas sombras:

No todas las personas que podrían acceder al IMV o a la RGI lo hacen, especialmente entre quienes sufren pobreza severa.

Una parte importante de los hogares en pobreza severa declara no haber recibido información suficiente sobre el IMV, pese a ser uno de los colectivos a los que va especialmente dirigido.

Y, sobre todo, sabemos que la protección económica no elimina por sí sola otras formas de exclusión: la discriminación, el aislamiento, la falta de participación o la exclusión residencial.

No fallan las personas, falla el sistema

Me gustaría que pusieran atención a la siguiente idea: no fallan las personas, falla el sistema. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia.

La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian se forman, activan redes y siguen planes de inclusión, pero chocan con barreras estructurales. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados.

Avanzando en los problemas claves, hoy la exclusión social en Euskadi funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión.

Brechas de desigualdad y exclusión.

La vivienda es el epicentro de la desigualdad y exclusión:

La vivienda en País Vasco se ha convertido en el epicentro de la desigualdad: 1 de cada 6 personas en Euskadi (el 17%) está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

Los precios —de compra y de alquiler— crecen casi a la par que los ingresos y anulan buena parte de su incremento. Desde 2018 el Índice de Precios de la Vivienda sube del 20% (obra nueva +34%, segunda mano +17%), una cifra muy cercana al incremento de los salarios.

En el mercado del alquiler, la presión es doble.

Primero, porque entre 2018 y 2023 la cuota media ha subido un 16%, y más de un 20% en Vitoria-Gasteiz y Araba.

Y segundo, porque el alquiler se concentra en quienes peor lo pasan: solo el 17% de la población vive de alquiler, pero entre las personas en riesgo de pobreza más de la mitad, el 52%, están alquilando. En España la diferencia es menor, (21% y 36%).

Además, mientras el riesgo de pobreza apenas afecta al 5% de quienes viven en propiedad, llega al 30% de quienes viven de alquiler, frente a una media general en Euskadi del 9% en 2024.

Este incremento del coste de la vivienda se refleja en que el 13% de hogares (122.000 hogares) destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa.

Las consecuencias de esta presión que ha empeorado la vida de las familias ya son estructurales: 42 mil personas residen en una vivienda insegura por inestabilidad en la tenencia de la vivienda o por dificultades legales; y 218 mil personas en una vivienda inadecuada con problemas de hacinamiento (que ha aumentado del 7% en 2018 al 10% en 2024), habitabilidad e insalubridad. Golpeando con más fuerza a los hogares de origen extranjero, a los hogares encabezados por mujeres, las parejas con hijos y en particular las familias numerosas.

Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Euskadi. Es ahora, más que nunca, un “derecho fake”. La vivienda debería convertirse en un pilar del Bienestar: para ello es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en integración social.

El empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración no lo nota

Tenemos una buena noticia y, a la vez, un matiz importante.

Euskadi está creando empleo y una parte del mercado laboral se ha estabilizado. Entre 2018 y 2024, el número de personas ocupadas ha

pasado de 924 a 988 mil, un crecimiento del 7%, aunque por debajo del 12% registrado en el conjunto de España.

La mayor parte de este aumento, un 80%, se debe a la incorporación de personas nacidas en el extranjero al mercado de trabajo vasco; solo un 20% —unas 11.000 personas— corresponde a personas nacidas en España. Al mismo tiempo, la temporalidad ha bajado y esto ha tenido un efecto integrador para una parte de la población.

Pero cuando miramos la letra pequeña, la foto cambia. Sí, los salarios han subido en la nómina, pero apenas han ganado poder de compra: entre 2018 y 2023, el sueldo medio aumentó un 17% en términos nominales, pero solo un 0,6% en términos reales. Con la inflación y el coste de la vivienda disparados, esa mejora se queda muy corta.

En resumen: se trabaja más, pero para una parte importante de la población eso no basta para salir de la cuerda floja.

Por su parte, la precariedad, aunque se reduce, no desaparece: parcialidad involuntaria (8%), inestabilidad laboral grave (6%) siguen marcando a una parte importante de quienes trabajan, especialmente en sectores ligados al sector servicios. Entre los hogares que ya estaban en peor posición, el avance se nota, pero no lo suficiente.

Aquí reside la gran paradoja vasca: una notable recuperación del empleo que no se traduce en una reducción suficiente de la exclusión social, y en un aumento notable de las situaciones de integración precaria con respecto a 2018. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. El 11% de los hogares vascos están afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).

Las políticas de inclusión deben concentrarse en dos frentes: las personas desempleadas y quienes ocupan puestos de baja calidad. Son los grupos donde el desempleo y la mala calidad del empleo actúan con mayor intensidad generando carencias y exclusión, por lo que el esfuerzo público debe priorizarlos.

Los multiplicadores de la desigualdad:

Las relaciones sociales avanzan hacia una red rota y desigual

Pero si hay otro factor que el informe destaca como una importante herida, es una estructura de relaciones desigual y erosionada que, en no pocos casos, fractura el sostén cotidiano y aísla a los más expuestos. Los problemas ligados al conflicto y el aislamiento social se han reducido en Euskadi desde 2018, aunque los de aislamiento se mantienen ahora por encima de los valores registrados en 2018.

El mapa interno es desigual. La convivencia y la soledad estructural castigan de forma muy diferente a quienes están dentro o fuera del sistema. Mientras que, entre los hogares integrados, el conflicto social es muy bajo (afecta al 1,5%) y el aislamiento es limitado (5%), la situación se dispara para los hogares en exclusión. Entre ellos, el conflicto se multiplica hasta el 13% y el aislamiento crece hasta el 15%.

Tras la pandemia, las relaciones cercanas se estabilizan: un 72% de los hogares vascos dice que sus relaciones (amistades, familia, vecindario) siguen igual, un 14% considera que se han fortalecido y otro 14% que se han deteriorado. Sin embargo, de nuevo el deterioro se concentra en la población en exclusión: el 23,5% de los hogares en exclusión sienten que sus lazos se han debilitado. Quienes más carecen, son también los que más lo necesitan...

Y en medio de esta fractura, hay una mala noticia: la solidaridad entre hogares se ha debilitado fuertemente. La proporción de hogares que proporcionan algún tipo de ayuda (mutua o unilateral) ha pasado del 80% en 2018 al 56% en 2024.

A esta realidad hay que sumar la sombra de la discriminación. Casi uno de cada cuatro hogares vascos (22%) dice haberla sufrido. Entre los que viven en exclusión, la cifra se dispara a uno de cada tres (34%). El motivo más repetido entre los hogares excluidos es la nacionalidad o el origen (22,5%). La consecuencia es devastadora: el 61% de las personas excluidas que sufren discriminación reportan pérdida de oportunidades, sobre todo en el empleo y en sus relaciones sociales.

Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible. Donde se rompen, la exclusión se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo

relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias. Las respuestas, por tanto, deben actuar sobre ambos planos, material y relacional, lo que nos llevaría a la necesidad de unos servicios sociales orientados a promover conexión y habilidades relacionales, más allá de gestionar prestaciones.

La exclusión social y la precariedad están deteriorando la salud mental y exigen una respuesta estructural e integral.

En Euskadi, el 9% de la población sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15% en España, y la situación ha mejorado desde 2018. Pero los casos más graves —pasar hambre o no poder comprar medicación se concentran en la población en exclusión social y en quienes viven en integración precaria.

El motor principal es económico. La dificultad para comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos afecta a 157 mil personas, (un 7% de la población), y a casi la mitad de los hogares donde viven personas en exclusión. Y la barrera va más allá: el 13% de los hogares declara pasar o haber pasado hambre en los últimos diez años, un problema que se ha agravado desde 2018, también entre quienes están en integración precaria.

Pero quizá el rasgo más llamativo en Euskadi es el impacto sobre la salud mental. La exclusión y la precariedad están deteriorando el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Vivimos en un contexto de cambios profundos, incertidumbre, pérdida de referentes, vínculos comunitarios debilitados y vidas cada vez más precarias. En este escenario crecen la ansiedad y la depresión, especialmente entre jóvenes, personas migrantes, mujeres y quienes ya viven en pobreza. La inseguridad laboral se confirma como uno de los factores que más desgasta la salud mental.

Es verdad que la mayoría de la población valora bien su salud física y mental, y que en 2024 mejora algo el estado de ánimo respecto al golpe de la pandemia. Pero en los contextos de exclusión la imagen es muy distinta: el desgaste es mayor y el malestar sigue siendo intenso. Exclusión social y problemas de salud mental forman un círculo vicioso. Por eso no hablamos solo de un problema clínico o individual: necesitamos políticas públicas

integrales que garanticen atención sanitaria accesible, empleo digno, protección social, vivienda, redes comunitarias fuertes y lucha contra la discriminación.

Hoy, la salud mental es un auténtico termómetro de justicia social y nos señala la urgencia de una respuesta en Euskadi.

Quiénes concentran el riesgo: Los rostros de la exclusión social en Euskadi

La exclusión social en Euskadi no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles que se repiten en el territorio y que combinan recursos materiales, procedencia, edad y estructura del hogar. Lejos de ser una suma de carencias individuales, la exclusión es el resultado de posiciones sociales que concentran desventajas y exponen a ciertos grupos a mayores barreras para participar plenamente de la vida económica, política y cotidiana.

Esto nos obliga a leer los datos con una doble clave: Sí, hay avances agregados, pero determinados perfiles siguen soportando el peso principal de la exclusión, y algunos de ellos lo soportan más que antes.

El primer rostro está influido por el origen y la nacionalidad. Las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera (41%) son 5 veces superiores a las de quienes tienen nacionalidad española (8%);

La participación política actúa como un vector adicional de exclusión. Los obstáculos a la participación política derivados de la nacionalidad extranjera son la segunda problemática de exclusión más frecuente en Euskadi, afectando al 13% de la población. La exclusión no es, por tanto, solo material: también es cívica.

La infancia y la juventud configuran el segundo rostro y concentran una vulnerabilidad singular: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (20%) es más de tres veces superior a la de las personas mayores de 65 años (5,5%).

Aquí la exclusión se asocia menos a la vejez y más al ciclo de crianza, con picos en la población menor de 18 años y en el tramo de 18 a 44 años (19%).

Esta pauta sugiere que las necesidades de cuidado y el sobre coste en etapas de crianza tensan los presupuestos y elevan los riesgos, un diagnóstico respaldado por la sobrerrepresentación de hogares con menores de edad

dentro de la exclusión: estos hogares suponen el 65% de toda la población excluida en Euskadi.

La vulnerabilidad también afecta especialmente a la población juvenil en Euskadi. Una realidad que se explica por un mercado de trabajo que sigue penalizando el acceso al empleo: la tasa de paro entre los jóvenes menores de 30 años es del 17%, más del doble que la tasa general de la comunidad (8%). La fuerte presencia de inestabilidad laboral entre los jóvenes, lo que reduce la capacidad de ahorro y emancipación; y una vivienda encarecida y precaria que actúa como cuello de botella: El resultado es una transición a la adultez más larga y frágil, con proyectos de formación, movilidad y crianza postergados, en la que los hogares encabezados por jóvenes concentran con mayor frecuencia problemas residenciales y un riesgo social más alto.

El tercer rostro está relacionado con el género y la composición del hogar. Se observa con nitidez al mirar quién encabeza el hogar. La exclusión afecta al 15% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 10% cuando los encabeza un hombre. La brecha es muy acusada —mayor incluso que en el conjunto de España, y se amplifica si añadimos la carga de cuidados, la posición laboral y el acceso a la vivienda.

Un territorio que resiste bien, pero no puede conformarse

Los datos nos dicen que Euskadi es hoy un territorio relativamente protector. En comparación con el conjunto del Estado, contamos con mayores niveles de integración social, una reducción clara de la exclusión severa, menos pobreza y desigualdad y un sistema de garantía de ingresos que llega a la mayor parte de la pobreza real y evita escenarios mucho peores. Eso significa que las políticas de las últimas décadas han funcionado en buena medida y han creado un cierto escudo social.

Pero este balance positivo no puede llevarnos a la autocomplacencia. Porque, al mismo tiempo que resistimos mejor que otros territorios, vemos tres tendencias preocupantes: se ensancha la integración precaria —cada vez más gente vive “dentro”, pero con mucha fragilidad—, crece la exclusión en el acceso a derechos sociales y de ciudadanía, especialmente en vivienda y salud, y persisten bolsas importantes de vulnerabilidad

material que dejan a muchos hogares sin margen para afrontar nuevos golpes.

El mensaje no es catastrofista ni triunfalista: el sistema de protección social importa, pero no basta si no reducimos la precariedad vital, la exclusión de la vivienda y las desigualdades cotidianas.

Un modelo social agotado y una sociedad del miedo

Si miramos más allá de los indicadores, el informe describe un modelo social debilitado, que tiende a producir desigualdad, precariedad y fractura. Es una estructura económica que desgasta a las personas y al planeta, que proclama derechos universales, pero limita su acceso real, especialmente en vivienda y salud. Es un modelo ecológicamente insostenible y profundamente individualista, que convierte desigualdades estructurales en aparentes fracasos personales y rompe vínculos comunitarios.

El resultado es una sociedad del miedo y la desconfianza: la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individual, la desafección democrática y la sensación de que “cada cual se las apaña como puede”. Sin embargo, también vemos semillas de esperanza: redes comunitarias, movimientos sociales, economía solidaria y prácticas cotidianas de cuidado mutuo que muestran que existe voluntad de cambio.

Hacia un nuevo pacto social que ponga la vida en el centro

Ante esta encrucijada, el informe plantea un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento a cualquier precio y en el rendimiento individual, a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. El bienestar no puede medirse solo por el consumo, sino por la capacidad de “biencuidar”: garantizar vidas dignas y sostenibles para todas las personas.

Eso exige un nuevo pacto social con dos motores: instituciones públicas fuertes, capaces de garantizar derechos y reducir desigualdades, y una sociedad civil activa, organizada y corresponsable. Un pacto que se concrete en políticas valientes en vivienda, empleo, fiscalidad, protección social y migraciones, y que no solo redistribuya, sino que frene la desigualdad en su origen.

En definitiva, se trata de elegir entre seguir por la senda del individualismo y la insostenibilidad, o apostar por un cambio de rumbo que ponga la vida en el centro, combata la desigualdad y promueva una ciudadanía inclusiva e intercultural. De eso trata este informe: de poner datos a las fracturas, pero también a las capacidades de Euskadi, para decidir juntos un futuro en el que nadie quede atrás.

Muchas gracias.